

Santiago, veinticinco de febrero de dos mil veintidós.

Vistos:

En autos RIT O-271-2020, RUC 2040255959-5, del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, por sentencia de catorce de enero de dos mil veintiuno, se acogió la demanda de cobro de diferencias de indemnizaciones por término de contrato y se condenó a la demandada al pago de los saldos derivados de su cálculo sobre la base del total de la última remuneración del demandante, sin aplicar el límite de 90 Unidades de Fomento previsto en el artículo 172 del Código del Trabajo.

En contra de ese fallo el demandado interpuso recurso de nulidad, y una sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, por decisión de dos de julio de dos mil veintiuno, lo rechazó.

Respecto de este último pronunciamiento, la misma parte dedujo recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando se lo acoja y se dicte la sentencia de reemplazo que describe.

Se ordenó traer estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. La presentación en cuestión debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones recaídas en el asunto de que se trate, sostenidas en las mencionadas resoluciones y que hayan sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia fidedigna de la o de las que se invocan como fundamento.

Segundo: Que la materia de derecho que el recurrente propone unificar, consiste en declarar que el artículo 7° transitorio inciso primero del Código del Trabajo, que regula la situación especial del pago de indemnizaciones por término de contrato de los trabajadores contratados con anterioridad al 14 de agosto de 1981 y cuyo contrato haya estado vigente al 1 de diciembre de 1990, los exceptúa de la aplicación del límite de 330 días establecido en el artículo 163 del citado código, pero no del tope de 90 Unidades de Fomento que consigna su artículo 172, el cual se aplica en su plenitud, pues la norma nada dice sobre el punto.



Reprocha que no se haya aplicado la doctrina sostenida en el fallo que apareja para efectos de su cotejo, dictado por esta Corte en los antecedentes rol N° 2.351-2002, en que respecto de un trabajador contratado el año 1978, cuya indemnización había sido otorgada sin aplicar el límite de 90 Unidades de Fomento como remuneración mensual, se declaró que el artículo 172 del Código del Trabajo es aplicable a los despidos o términos de contratos de trabajo producidos con posterioridad a su vigencia, porque es a partir de ese hecho que surge la oportunidad de su regulación, dado que antes el trabajador ha tenido una mera expectativa de obtener una indemnización si se producen las condiciones legales y se trata de ciertas causales predeterminadas, agregando que, en esta materia, los años de servicios no tienen más alcance que el determinar su procedencia y constituir un criterio para fijar la cuantía, de manera que el beneficio no constituye una retribución a los servicios prestados.

Tercero: Que la sentencia impugnada, rechazó el recurso de nulidad que el demandado dedujo, sobre la base del motivo consagrado en el artículo 477 del Código del Trabajo, acusando la infracción de su artículo 7° transitorio.

Como fundamento de la decisión, se sostuvo que el límite de 90 Unidades de Fomento no estaba contemplado por la legislación laboral a la época en que las partes celebraron el contrato de trabajo, esto es, el año 1978, en razón de ello y dado que el artículo 7° transitorio del Código del Trabajo contiene una regla general, según la cual los trabajadores contratados antes del 14 de agosto de 1981 tienen derecho a las indemnizaciones “que les correspondan conforme a ella”, se debe colegir necesariamente que rige la ley vigente al tiempo de la contratación, en concordancia con lo previsto en los artículos 9 inciso primero del Código Civil y 22 de la Ley sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes. Además, se estimó que no obsta a esa conclusión la circunstancia que la citada norma transitoria agregue “...sin el límite máximo a que se refiere el artículo 163”, sin hacer referencia al aludido tope, pues el derecho a las indemnizaciones que le compete a un trabajador con motivo de su despido injustificado, surge de manera coetánea al momento en que es contratado, erigiéndose como una suerte de seguridad anexa al contrato y, por lo mismo, se incorpora al patrimonio del trabajador a esa poca, y que esa interpretación es armónica con los principios que rigen al derecho del trabajo.

Por consiguiente, se declaró que el tope de 90 Unidades de Fomento a que se refiere el artículo 172 del Código del Trabajo, no es aplicable en la base de



cálculo de la indemnización por años de servicio, de los trabajadores con contrato vigente al 1 de diciembre de 1990 y que fueron contratados con anterioridad al 14 de agosto de 1981.

Cuarto: Que, no obstante constatarse la existencia de pronunciamientos diversos emanados de tribunales superiores de justicia respecto de dicha materia de derecho, habida cuenta, en particular, de lo resuelto en el ofrecido por el recurrente para su cotejo y en el que se impugna, lo cierto es que esta Corte estima que no procede unificar jurisprudencia, por cuanto, coincide en la decisión que estimó que en el caso no correspondía aplicar el límite a las indemnizaciones consagrado en el artículo 172 del Código del Trabajo, que impide considerar una remuneración mensual superior a 90 Unidades de Fomento, debiendo ser determinadas sobre la base del total de la última remuneración del demandante.

Quinto: Que, en efecto, esta Corte posee un criterio asentado que ha sido expresado en sentencias previas, como son las pronunciadas en los autos rol N° 27.882-2017 y 18.818-2018, en las que a propósito de contratos de trabajo celebrados antes de la vigencia de la norma que establece el límite en cuestión, se consideró que el artículo 7° transitorio del Código del Trabajo contiene una regla general según la cual los trabajadores contratados antes del 14 de agosto de 1981 tienen derecho a las indemnizaciones "...que les correspondan conforme a ella...", de lo que se debe colegir que rige la ley vigente al tiempo de contratación, atento a lo que disponen los artículos 9 inciso primero del Código Civil y 22 de la Ley sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes; sin que obste a tal conclusión la circunstancia que agregue "...sin el límite máximo a que se refiere el artículo 163...", sin hacer referencia al tope, pues el derecho a las indemnizaciones que le compete a un trabajador con motivo de su despido injustificado, surge de manera coetánea al momento en que es contratado, erigiéndose como una suerte de seguridad anexa al contrato y, por lo mismo, se incorpora al patrimonio del trabajador a esa época; y porque en el proceso de interpretación de la normativa laboral, precisamente por la finalidad que persigue, dar protección al trabajador y, con ello, a la fuente laboral, no corresponde efectuar disquisiciones extensivas, más aún si, de esa manera, no se cumple el objetivo enunciado. La interpretación de la normativa laboral debe ajustarse al principio de protección, que tiene como una de sus manifestaciones concretas el pro operario, conocido también como el *in dubio pro operario*, que en el ámbito judicial está referido a la facultad de la judicatura de interpretar la norma según dicho criterio, de manera que al existir varias



alternativas posibles se debe optar por la más favorable al trabajador. Pues bien, en el caso concreto, una labor de exégesis no inspirada en ese principio, lo que se traduce en una de tipo extensiva, provocaría un perjuicio en el patrimonio del demandante, pues se lo privaría del derecho a obtener una indemnización sin el tope ya señalado.

Dicho contexto condujo a concluir que el tope de noventa Unidades de Fomento a que se refiere el artículo 172 del Código del Trabajo, no es aplicable en la base de cálculo de la indemnización por años de servicio, de los trabajadores con contrato vigente al 1 de diciembre de 1990 y que fueron contratados con anterioridad al 14 de agosto de 1981, como es el caso del actor.

Sexto: Que, en estas condiciones, no yerra la Corte de Apelaciones de Temuco al concluir que, en el caso, no se aplica el límite en examen a la remuneración que debe servir de base de cálculo de las indemnizaciones a que tiene derecho el demandante en razón del término de su contrato de trabajo, por lo que corresponde desestimar el recurso en examen.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de dos de julio de dos mil veintiuno.

Acordada con el **voto en contra** de la ministra señora Muñoz, quien fue de opinión de acoger el recurso y dictar la respectiva sentencia de reemplazo, por compartir los argumentos desarrollados en la sentencia ofrecida para su cotejo y en las contenidas en los roles 27.882-2017 y 18.818-2018, que sostienen el mismo criterio, en cuanto a que:

1° El problema jurídico planteado no se relaciona con la retroactividad o irretroactividad de la ley, ni con la afectación de derechos adquiridos, sino que con la aplicación inmediata de la ley a situaciones acaecidas con posterioridad a su vigencia, dado que las indemnizaciones sustitutivas del aviso previo y por años de servicio sólo nacen a la vida del derecho, se generan y consolidan y, por ende, quedan en posición de incorporarse al patrimonio del trabajador ocurrido que sea el despido o terminación del respectivo contrato de trabajo, y no cualquier despido o terminación, sino sólo respecto de los que se producen en ciertas circunstancias determinadas por la legislación.

2° Que cuando la ley atiende o considera en la materia el tiempo servido por el trabajador, ello no significa que este beneficio se constituya en una especie



de retribución a los servicios prestados, sino que la indemnización sigue correspondiendo a una prestación instituida por la ley, en directa relación con la existencia de un despido determinado, que se concibe con motivo u ocasión de éste, por lo que el factor "antigüedad" no tiene más alcance que el de determinar su procedencia y cuantía.

3° En estas condiciones, es dable concluir que la ley llamada a resolver el conflicto, es la vigente a la época de verificarse el despido, porque es éste el momento en que nace el derecho, toda vez que antes que ello ocurra, sólo existe una mera expectativa acerca de la pretensión del actor. Por lo tanto, es en ese instante cuando surge para el caso concreto la oportunidad de su regulación, sin que ello importe hacer la norma extensiva a situaciones acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor, como sí ocurriría de aplicarse la que regía con antelación, que en ese evento, se extendería más allá de sus alcances, aplicándola cuando ya está fenecida.

4° Por consiguiente, y teniendo, además, en cuenta que no existe en la materia norma especial o transitoria alguna que disponga algo diverso, dado que el artículo 7° transitorio del Código del Trabajo sólo se refiere en forma expresa a su artículo 162, debe concluirse que el precepto aplicable en la especie lo es el del artículo 172 del citado código y que, consecuentemente, es pertinente atender al tope o límite que para la remuneración base ha previsto dicha norma.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase.

N° 53.105-21.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señora Andrea Muñoz S., Ministro Suplente señores Juan Manuel Muñoz P., Raúl Mera M., y Roberto Contreras O. Santiago, veinticinco de febrero de dos mil veintidós.





En Santiago, a veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

